

Historia de dos ciudades/historia de dos países: La Habana y Barcelona, 1868-1933

Josep M. Fradera (UPF/ICREA)

Crisis de imperio, construcción nacional

Las décadas entre los años setenta del siglo XIX y los treinta del siglo pasado resultaron claves para las sociedades cubana y catalana. En esta etapa, Barcelona y La Habana, metrópolis genuinas al final del periodo, ocupaban una posición estratégica como capitales que eran de naciones imaginadas que solo con el devenir del tiempo definirían sus aspiraciones y las plantearían en escenarios más amplios, con resultados que todavía hoy son inciertos. Mundos muy distintos, ambas ciudades y los países en los que ejercían una capitalidad oficial u oficiosa estaban entrelazados por largas relaciones económicas, sociales y culturales, finalmente humanas.

En este más de medio siglo en el que esta relación se explora —para ser más precisos, entre el cambio político en España de 1868, cuando Isabel II abandonó el país y se abrió una etapa constituyente que incluiría la experiencia republicana de 1873, y principios de la década de 1930, con los efectos de una dura depresión económica mundial en curso ya perceptibles y una crisis política en ciernes en Europa y en el mundo—, ambas sociedades han pasado por una profunda transformación interna y del lugar que ocupaban en el mundo. En 1868, La Habana y Barcelona eran capitales de dos de las más ricas y conflictivas provincias de la monarquía, aquella nación con tres colonias nacida de la quiebra del gran imperio en 1824. Nación constitucional, monarquía representativa desde 1836, tan solo un año después había condenado a las tres colonias a la exclusión del sistema constitucional, y a Cataluña, a una sucesión de estados de guerra y suspensión de las garantías constitucionales que redujeron, a menudo, la vida política liberal a pura hipótesis. La capital de la Cuba azucarera y esclavista y la capital de la industria algodonera y la marina mercante encajaban mal en un esquema político débil y escasamente asentado hasta las últimas décadas del siglo XIX.

Cuando en 1868 un pronunciamiento militar, en el que participaron algunos de los más distinguidos militares del régimen isabelino, encabezados por Francisco Serrano —que había sido capitán general de Cuba— y el catalán Juan Prim —que lo había sido mucho antes de Puerto Rico y que había participado en la invasión del México republicano con franceses y británicos—, derribó a la monarquía de Isabel II, se abrió un periodo de reformas en España

que a la fuerza obligaría a replantear la posición de cubanos y catalanes en esta. Para los cubanos, había llegado el momento de la gran verdad, pospuesta cuando las reformas solicitadas por la generación de liberales reformistas de **El Siglo** en la década de 1860, con el auxilio del más insigne de los exiliados, José Antonio Saco, encallaron en la Junta de Reformas en Madrid. El dilema era muy claro: ¿qué era antes: la reforma política o la abolición de la esclavitud, el mayor de los problemas cubanos? Para Barcelona y Cataluña, la apertura de una nueva etapa, más democrática y libre, significaba abrir la posibilidad de articular un sistema político —partidos, sindicatos obreros, asociaciones, vida cultural— acorde, finalmente, con la complejidad de una sociedad industrial muy densa desde las décadas centrales del siglo XIX, quizás la única de este estilo en la Europa mediterránea. Política y economía, relación con un complejo más amplio de la nación imperial, modelos de modernidad europeos y estadounidense; son factores que buscarían un equilibrio nuevo en las décadas que conducen hasta el fin de siglo.

Barcelona y La Habana en el siglo XIX

Tanto Barcelona como La Habana eran importantes plazas fuertes de la monarquía; ciudades puerto importantes, aunque la capital catalana careciese de un abrigo natural en modo alguno comparable al de La Habana. Barcelona había sido una plaza fuerte amurallada desde los romanos y el Medioevo. Su sistema defensivo había sido fuertemente alterado tras la guerra de sucesión a la Corona española, a principios del siglo XVIII, cuando las instituciones catalanas y la ciudad muy particularmente se alinearon con el pretendiente austriaco y en contra de Felipe V. Tras la derrota de los Habsburgo, la ciudad sería duramente castigada. Se derribó un barrio entero y se levantó una impresionante ciudadela sobre el glacis de la muralla, por un parte, sistema defensivo fronterizo y, por otra parte, sistema de vigilancia sobre una ciudad sospechosa de deslealtad al monarca. En el siglo XIX, el sistema de murallas y la misma ciudadela se convirtieron en los símbolos por excelencia de la opresión política y del ahogo de la ciudad industrial en desarrollo, condenada hasta 1859 a albergar sus fábricas en el interior del perímetro amurallado o en las pequeñas localidades del llano circundante y, al mismo tiempo, a densificar su estructura urbana para acoger a una población obrera cada vez mayor.

La Habana fue igualmente plaza amurallada desde el siglo XVII. Era además el puerto de destino de toda la navegación entre España y sus Indias, “la llave de América”. De Sevilla primero, de Cádiz a partir del siglo XVIII, llegaron durante siglos los mercantes y la armada española en su singladura desde la península hasta los puertos continentales americanos y,

todavía más, en el viaje de retorno. La defensa de la embocadura del puerto estaba garantizada por las fortificaciones de la Punta y el Morro, a ambos lados de la bocana del puerto natural, para la que se ideó, además, una cadena de cierre a finales del siglo XVI. La ciudad estaba protegida, asimismo, por la Fuerza, una poderosa fortificación levantada en la segunda mitad de aquel siglo. En momentos posteriores se les añadirían la Cabaña y el Morro, formando una protección casi completa de la ciudad puerto. Cuando en 1762, durante la guerra de los Siete Años, los ingleses invadieron la isla y tomaron la ciudad, lo hicieron duplicando el asedio exterior con el ataque por tierra, evitando así el vasto sistema defensivo planeado para la guerra desde el mar. Al igual que sucedió en Barcelona, cuando las grandes divisiones civiles en la ciudad del siglo XIX, el mando militar y la presencia de una importante guarnición eran un factor de primer orden.

En Barcelona, la posición política y militar de la ciudad —lugar de residencia habitual de los reyes de Aragón y condes de Barcelona hasta que Alfonso el Magnánimo desplazó la Corte a Nápoles— fue siempre de la mano de una ciudad muy activa, artesanal y mercantil. En el siglo XVIII, el gran historiador ilustrado Antoni de Capmany escribió una densa historia de aquella compleja simbiosis mercantil e industrial, un complejo que a algunos les pareció por el estilo de la ciudad estado italiana. Dominadas las instituciones de la ciudad por los gremios y corporaciones industriales y mercantiles, este maridaje permaneció incólume (aunque no libre de conflictos) hasta la derrota de la ciudad en 1714 y el establecimiento de la Nueva Planta borbónica. Este sistema de militarización punitiva fue el antecedente necesario de las reformas borbónicas que serían exportadas a Cuba y el continente americano a partir de la década de 1760, tras la ocupación de La Habana, que las hizo urgentes desde la perspectiva de la defensa imperial.

En los siglos XVIII y XIX, las dos ciudades experimentaron un crecimiento urbano espectacular que las convertiría a ambas en genuinas metrópolis: una, europea del sur y mediterránea, y la otra, caribeña y atlántica. Las razones son bien conocidas: Barcelona se consolidó como la capital industrial de una Cataluña que fue definida como *la fábrica de España*; La Habana sería el puerto de salida y el centro de la revolución azucarera que emprendió la isla. La capital cubana fue también el lugar donde se concentró una importante industria de tabaco, con muchos talleres en la ciudad. Las consecuencias de ambas transformaciones, de la primera oleada de revolución industrial catalana y de la “primera danza de los millones”, en palabras de Manuel Moreno Fraginals, del azúcar cubano, serían muy distintas en carácter y consecuencias. Para la capital cubana, la expansión de la agricultura de plantación significó convertir la ciudad en el nudo de un amplio sistema de comercio exterior; para Barcelona, su calidad de capitalidad algodonera la vinculó, en primera

instancia, a los consumidores del resto de España, un mercado parcialmente protegido. Sin embargo, la misma riqueza exportadora convirtió a La Habana en el centro del comercio colonial y americano español. Mientras, Barcelona, por su propia naturaleza de sociedad industrial, precisaba de alimentos (calorías y estimulantes vegetales como el café o el tabaco) que procedían de La Habana o de una primera materia (el algodón en rama) que, llegados de Nueva Orleans, Mobile o Charleston, eran indispensables en las fábricas del interior. En este sentido, La Habana y Barcelona se encontrarían ligadas por múltiples vínculos de comercio (también el del tráfico clandestino de africanos hacia Cuba hasta mediados de la década de 1860) y navegación transoceánica. Algunas grandes empresas navieras, mercantiles y las casas de banca se sostenían, en buena medida, sobre el eje La Habana-Barcelona. Como señaló en 1871 Juan Güell y Ferrer, gran industrial después de pasar por la isla, sin Cuba —es decir, La Habana—, no existiría el comercio exterior barcelonés y catalán que se conocía en la época.

Las cosas pueden leerse de otra manera. Cuando se implantaron las reformas borbónicas de la segunda mitad del siglo XVIII, La Habana y las llamadas Islas de Barlovento se convirtieron en la cabeza de puente por la que llegaban los factores y comerciantes catalanes al Caribe. Más tarde, el eje Veracruz-La Habana adquirió una gran importancia en el comercio colonial. Con la desintegración del imperio en el continente, La Habana sería el lugar de repatriación preferente de muchos comerciantes asentados en el área circuncaribeña y en Nueva España, incluso de algunas tentativas de recuperación armada de este hasta finales de la década de 1820. Finalmente, a mediados del siglo XIX, el eje La Habana ciudad, provincia de La Habana y Matanzas se convirtieron en un complejo fundamental para la emigración y los negocios de los catalanes en el mundo colonial español. Sin duda, los esquemas que estructuraban aquella relación fueron cambiando con el tiempo. Hasta el año 1870 predominaba la navegación a vela y la empresa naval tradicional; en el interior de aquel modelo, hacia 1850 aparecieron las compañías navieras barcelonesas que controlaban una parte importante del negocio; entre ellas, la Compañía Trasatlántica, que se haría con el control de muchas de las contrataciones con el gobierno, el transporte de tropas y pasajeros. Fundada en 1881 por el cántabro establecido en Barcelona Antonio López y López, que había sido negrero en su juventud en Santiago de Cuba, la compañía de navegación constituiría la columna vertebral de un imperio que se ramificaba por todos los espacios bajo control colonial o con fuertes intereses españoles, hasta Filipinas y el norte de África. A ello se sumaría una casa de banca que repatriaba las remesas de los emigrantes, el banco Hispano-Colonial, y la gran compañía hispano-francesa con sede en Barcelona que, en 1882, pasaría a controlar el negocio tabaquero en Filipinas, en manos del monopolio estatal hasta aquel momento.

La base industrial barcelonesa y catalana y la potente agricultura de exportación habanera y cubana nacieron por las mismas fechas, en las dos últimas décadas del siglo XVIII. Entre 1780 y 1859, cuando empezó la gran transformación urbana de la ciudad, Cataluña era una sociedad muy densamente industrial. Como ya se dijo, una parte de esta industria se estableció en el interior de la propia ciudad de Barcelona y en las inmediaciones, puesto que, hasta 1859, Barcelona no pudo urbanizar el llano que la circundaba e imponer un plan de ensanche de la ciudad, por expresa prohibición de los gobiernos de la monarquía en atención a consideraciones militares. El resultado de ello sería la exportación de la industria a los pueblos rurales del entorno y hacia algunas ciudades cercanas. Solo a partir de la década de 1870, la industrial textil se desplazaría hacia el interior catalán, buscando recursos hidráulicos para generar energía y paz social para aislar a los obreros. Porque, en efecto, el factor más conflictivo de la transformación de la ciudad fue la concentración obrera en sus barrios: primero, en el interior de la misma ciudad amurallada, con problemas sociales y de salubridad muy serios; después, en el *hinterland* urbano de su alrededor, que se densificaría también de modo notable. En la impresionante estadística que preparó el urbanista Ildefons Cerdà para justificar su Plan de Ensanche, el número de obreros en Barcelona en 1856 era de 54.272 personas (sin incluir a los niños menores de ocho años, como señalaba el urbanista: “Hemos querido suponer que niños de tan tierna edad no se dedican nunca al trabajo”). Dicho de otra manera, los trabajadores fabriles constituían el tercio exacto del total de la población de la ciudad. Las huelgas generales de 1855, 1871 y 1902, expresiones de un largo periodo de sostenida conflictividad, dan fe de las condiciones de vida de la población obrera, de la enorme tensión sobre la que se construyó la sociedad liberal en Barcelona y Cataluña.

En La Habana, las fábricas de tabaco comenzaron a florecer extramuros a mediados del siglo XIX. En ellas, aparte de trabajo esclavo, empezó a formarse una emergente masa de trabajadores urbanos, libertos y mulatos libres que formaban una parte esencial de los oficios urbanos y en los muelles de la ciudad. Este proceso desembocó en la urbanización al otro lado de la bahía, en las zonas del Cerro y el Vedado, donde se establecieron, al mismo tiempo, los criollos adinerados. Fue una urbanización distinta, menos compacta que la de la ciudad murada, con casas ajardinadas. Un ejemplo de ella es la residencia del conde de Fernandina, construida en el Cerro en 1858. La Habana entre murallas se convirtió, en el último tercio de siglo, en el lugar de residencia más modesto y el espacio para almacenes y pequeños comercios.

Joan Mañé i Flaquer, director durante décadas del **Diario de Barcelona**, escribió que la monarquía tenía dos cánceres: Cataluña y Cuba. Con ello se refería a la gran concentración obrera de Barcelona y su *hinterland* y al mundo de la esclavitud en La Habana y el occidente

cubano. Al lúcido (y conservador) periodista no se le escapaba que las duras condiciones políticas bajo las que vivieron ambas sociedades se relacionaba, sin duda, con la peligrosidad de los mundos sociales que estaban en su base, el fundamento de su prosperidad y dinamismo. El desarrollo de la esclavitud cubana era el resultado de las decisiones tomadas por los grandes habaneros de la generación de Arango, aquellos que entendieron que la crisis del Saint-Domingue y Haití les facilitaba la oportunidad de convertirse en los primeros azucareros del mundo. Entre el famoso *Discurso sobre la agricultura de La Habana y medios para fomentarla*, de 1792, y el gran episodio sanginario del “año del cuero” o conspiración de la Escalera —más los azotes desmedidos del primer suceso que el segundo—, el número de esclavos en la isla no dejó de crecer. En 1774, la población esclava de Cuba era de 38.879 individuos; 286.942, en 1827; 436.495, en el censo manipulado al alza de 1841; 370.553, en 1860. La última cifra, la de principios de los sesenta, refleja ya el agotamiento de un modelo basado en la constante entrada de africanos, de emigrantes forzosos. Solo que con mucho retraso, las mismas élites que habían auspiciado la importación de miles y miles de brazos percibieron la magnitud del polvorín sobre el que habían asentado su bienestar. Seguirían auspiciando las entradas clandestinas de esclavos, abrirían el negocio de importación de culíes chinos —chinos de Manila, en terminología cubano-española— y esclavizarían a unos cuantos miles de indios mayas yucatecos. La industria de la infamia perseveró hasta muy tarde en el siglo XIX, a pesar de la oposición de los británicos y de los tratados de abolición que los gobiernos españoles habían firmado —sin ningún propósito de cumplir— en 1819 y 1845.

En efecto, la intensa relación que Barcelona, como centro industrial, naval y colonial, y La Habana sostuvieron a lo largo de décadas, entre 1789 y 1867, se basaba en una conexión siniestra, esto es, el tráfico de seres humanos entre la costa africana y los puertos cubanos. Entre aquellas dos fechas, entre 200.000 y 250.000 esclavos fueron introducidos en Cuba durante la etapa legal hasta 1820; el resto, algo más de 500.000 más, gracias a las redes clandestinas, aquellas que los cónsules británicos en Barcelona denunciaron repetidamente ante las autoridades con poco éxito. Son cifras a la baja, puesto que la estimación total es muy problemática. Un paliativo del alto precio de los esclavos procedentes de África fue la llegada importante de trabajadores contratados desde China —los llamados *culíes* o, absurdamente, *chinos de Manila*— un floreciente negocio desde la década de 1850 y hasta 1874. El catalán Francisco Avellà tuvo un papel muy destacado en la organización de la red internacional que permitió aquella forma de esclavitud encubierta. Para la marina mercante y el comercio catalán este era un activo importante, nada fácil de ponderar estadísticamente, en su vinculación comercial con la Cuba esclavista. La influencia de aquella conexión económica esencial en otros ámbitos fue también muy relevante. A mediados del siglo XIX, algunos

catalanes que regresaron de Cuba adquirieron un papel social y económico muy relevante en Cataluña. Tres ejemplos bastarán: el caso de Miguel Biada Bunyol (1800-1872), promotor del primer ferrocarril en la península, entre Mataró y Barcelona, en 1848; el de Juan Güell y Ferrer (1789-1848), nacido en Torredembarra, origen de un grupo familiar de larga y densa trayectoria de vinculación con Cuba como resultado del matrimonio de su hijo Eusebio (protector, a su vez, de Antoni Gaudí) y la hija de Antonio López; y, finalmente, el caso de Josep Xifré i Casas (1877-1856), nacido en Arenys de Mar, uno de los catalanes más ricos de su tiempo, promotor de la primera operación inmobiliaria en Barcelona —los conocidos como Porxos d'en Xifré— en los terrenos originados por la reforma del espacio entre la muralla de mar y el puerto en los años 1834-1837.

En el año 1841, coincidiendo con la actividad del plenipotenciario británico en la isla, David Turnbull, que desembocaría en la gran represión de la llamada *conspiración de la Escalera*, las instituciones económicas barcelonesas organizaron una gran campaña en la ciudad y en toda España contra la injerencia de la política abolicionista en Cuba, que consideraban intolerable. El apoyo a la institución se mantuvo hasta el final. Esta posición no era unánime. En el entorno barcelonés del obispo Torres Amat y del profesor universitario Bergnes de las Casas existió siempre una corriente partidaria de la abolición. Este modesto abolicionismo mantuvo siempre contactos con Gran Bretaña y con los núcleos de catalanes, que, en algunas ciudades como Matanzas, expresaron sus dudas y rechazo tanto hacia la continuidad del tráfico y el trabajo esclavo como hacia la política de exclusión política de los coloniales impuesta desde el mando de Tacón, en 1837.

Principio de transformación

A la altura del cambio político de 1868, tanto el régimen político vigente en las colonias españolas como la esclavitud institucionalizada estaban completamente agotados. Por esta razón, los años setenta señalaron una clara y decisiva cesura con el régimen político y económico consolidado cuatro décadas atrás en el fragor de la crisis política y revolucionaria en todo el Caribe y en los imperios de España y Portugal. El primer factor evidente de cambio fue el desenlace de la Guerra Civil norteamericana, con la renovación del republicanismo de los padres fundadores y la abolición por un acto de fuerza de la esclavitud en los estados sureños de la Confederación. El segundo momento corresponde al cambio político en España en setiembre de 1868 y a los inicios de la guerra de separación el 10 de octubre siguiente, la guerra que se prolongaría durante diez largos años. Los militares que dirigieron la llamada revolución Gloriosa y los seguidores de Carlos Manuel de Céspedes se conocían bien; incluso,

ciertos lazos de amistad unían a aquel con Juan Prim, unos de los hombres fuertes del levantamiento contra Isabel II y futuro regente antes de ser asesinado el 27 de diciembre de 1870.

Los años 1868-1878 enmarcan el principio de una transformación completa de la vida colonial: guerra de separación en Cuba (con el precedente del gran fracaso de la anexión de Santo Domingo); reforma fallida del régimen político colonial en la medida en que no pudo aplicarse en el contexto del conflicto militar; principio del fin de la esclavitud con el proceso simultáneo de liberación en los territorios dominados por los insurgentes y de reforma gradual desde arriba a partir de la Ley Moret del 4 de julio de 1870; y movilización masiva en Barcelona, finalmente, y otras ciudades peninsulares para sostener el esfuerzo militar español en la isla. Conviene verlo con mayor detalle y atención.

Durante los debates constitucionales de 1868-1869, los gobiernos españoles prometieron modificar la posición política de las tres colonias. Lo más importante en este punto era la reintegración de las provincias de Ultramar en el marco constitucional, el cual definiría la constitución aprobada en 1869, mucho más democrática que la de 1845, la vigente hasta entonces. En este contexto, los cubanos (así como los puertorriqueños) recuperarían la representación en las Cortes españolas, de la que habían disfrutado en las Cortes de 1810-1814 y en las de 1820-1823. Para poder hacer esto realidad, era imprescindible aflojar la mano del fuerte control sobre ambas islas y autorizar sin excusas la organización de partidos políticos. Como era de esperar, la metrópoli esperaba disponer de su propio partido “español” en las islas y trabajar con los medios institucionales y encubiertos a su alcance para el triunfo de la organización política partidaria del orden establecido. Para ello, contaban con la presencia de una importante población de peninsulares en Cuba, que no hizo más que crecer en las décadas que seguirían. La guerra en el oriente cubano convirtió la posibilidad de estabilizar una política normalizada, pero bajo control metropolitano, en una utopía. Solo con el fin de un conflicto, en el que ninguno de los dos ejércitos pudo imponerse, pudo pactarse en Zanjón, en febrero de 1878, la modificación de condiciones políticas tan opresivas.

Durante la guerra de los Diez Años, al incremento del elemento militar se sumó la presencia en La Habana y las principales ciudades cubanas de los batallones de voluntarios que los círculos colonialistas peninsulares enviaron a la Gran Antilla. En Barcelona, la movilización a favor del *status quo* fue bastante impresionante. Dirigida por los Círculos Ultramarinos, entidades en las que se agrupaba lo más distinguido de la burguesía mercantil e industrial barcelonesa, así como los personajes más relevantes de la cultura y el catolicismo para responder al reto cubano, su objetivo era doble: oponerse a la abolición de la esclavitud, a dilatarla en cualquier caso; y, en segundo lugar, sostener el régimen colonial y de dependencia

de la isla. La movilización fue pagada por las cuatro diputaciones catalanas, que reclutaron a muchos soldados de complemento entre la población obrera desocupada. Los primeros destacamentos salieron del puerto de Barcelona entre aclamaciones patrióticas catalanas y españolas a partir de 1869. En La Habana fueron recibidos con gran entusiasmo por catalanes allí radicados. Los voluntarios, junto con grupos similares procedentes de otras partes de España, pasaron a controlar las ciudades cubanas, mientras las tropas regulares luchaban contra el ejército insurgente. Cuando la guerra terminó, muchos de aquellos voluntarios siguieron en La Habana y Cuba: algunos, como emigrantes en las mismas condiciones que los demás; otros, todavía organizados como fuerza de difícil control en la capital cubana. Una década después del fin de la guerra, en 1888-1889, en un momento de fuerte descontento social y muchas huelgas de los trabajadores del tabaco, con motivo de las manifestaciones contra el capitán general Salamanca, los alborotos protagonizados por grupos de voluntarios condujeron a su definitiva desarticulación.

Uno de los motivos de mayor preocupación en Barcelona eran los efectos de la inevitable abolición de la esclavitud como consecuencia de la guerra y de las presiones abolicionistas internas y externas sobre los gobiernos españoles. Fueron las discusiones que condujeron a la ya mencionada Ley Moret, en efecto, el marco en el que la alianza entre los grandes intereses habaneros y del occidente cubano y los equivalentes en Barcelona y España se unieron para frenar el tímido proceso reformista. Para los grandes hacendados azucareros y el mundo del comercio en La Habana, la continuidad de la esclavitud parecía constituir la única garantía para la prolongación de un orden de cosas que había convertido a la ciudad y sus grupos dirigentes en una sociedad muy próspera. Para los grandes intereses económicos agrupados en Barcelona, la esclavitud garantizaba no solo un orden económico, sino la intangibilidad del nexo colonial que ligaba a la isla con su metrópoli. La Ley Moret era sobre todo lo que se conoce como una ley de libertad de vientres libres, pues solo manumitía a los nacidos a partir de entonces de madre esclava y a los mayores de sesenta años, una edad en la que poco provecho podía sacarse ya de un trabajador en régimen de plantación. De este modo, 287.620 esclavos de procedencia africana (en 1872), más 58.400 chinos en la misma fecha, pudieron continuar bajo el control de sus propietarios y garantizar la supervivencia de la gran plantación azucarera. Si la continuidad del trabajo servil era la condición del pacto entre el Estado y los grandes intereses del occidente de la isla, la fuga y la liberación de los esclavos por sí mismos, aprovechando la situación de guerra y la movilidad de las zonas ocupadas por el ejército insurgente, minaron la estabilidad de la institución. Además, los insurrectos de Céspedes concedieron la libertad inmediata a todos los esclavos que cruzasen la línea insurreccional, tal y como proclamó la primera constitución republicana, que se aprobó en

1869. En este escenario de tanta fluidez, muy bien descrito por la historiadora Rebecca J. Scott, el régimen de patronato aprobado el 13 de febrero de 1880 —finalizado el Sexenio Revolucionario y terminada la primera guerra— significó mantener a un número todavía considerable de esclavos (99.566, en 1883; 53.381, en 1885; y 25.381, en su último año, 1886) en régimen de plantación; permitía ganar tiempo aun fijando una fecha para la abolición definitiva, como ocurriría en Brasil en 1888. Cuatro años más tarde, la totalidad de los esclavos fueron finalmente liberados. La institución sobre la que se había edificado la gran prosperidad azucarera de la isla había llegado a su ocaso.

Cambio urbano y génesis de la ciudad moderna

Los cambios generales en Cuba y España fueron acompañados por el afianzamiento del papel de La Habana y Barcelona como ciudades puerto, capitales de sus propios mundos y fronteras entre sociedades distintas. Entre 1870 y 1930, ambas ciudades se convirtieron en metrópolis de pleno derecho, situadas ambas al final del periodo en el dintel del millón de habitantes. En 1877, la población de Barcelona era de 353.853 habitantes; 405.913, en 1887; y había superado el medio millón (544.137) en 1900. En 1920 se situaba ya cerca del cuarto de millón (721.869), y en 1930, por encima del millón (1.005.565), lo que la había convertido en la mayor ciudad de la monarquía. En estos cálculos, al igual que sucede en la metrópolis caribeña, debe considerarse el incremento producido por la agregación de las pequeñas poblaciones del entorno inmediato —en 1897, en el caso de la capital catalana— para formar, así, una conurbación metropolitana propiamente dicha. El caso de La Habana, ciudad hoy en día mayor que Barcelona si consideramos sus quince demarcaciones, es similar al de la capital catalana. En 1850, la ciudad de La Habana alcanzó los 125.999 habitantes; en 1899, la provincia de La Habana llegó a los 427.514; 538.010, en 1907; 697.583, en 1919; 985.500, en 1931; y 1.235.939, en 1943.

La transformación moderna de la ciudad obligó a terminar con el sistema defensivo de fuertes y murallas laboriosamente construido por la monarquía en siglos anteriores. Sin la demolición de aquel sistema era imposible el crecimiento de la ciudad moderna y la reforma higiénica que exigían las altas concentraciones en el interior de ambas ciudades, gestadas en su seno con los espectaculares crecimientos de los años 1840 y 1850. En el caso de Barcelona, la demolición de la corona de murallas era una exigencia de la población y del municipio desde el año 1841 cuanto menos, cuando una memoria del médico higienista y político radical Pere Felip Monlau, *¡Abajo las murallas!*, ganó un certamen convocado por el propio Ayuntamiento. Sin embargo, el Gobierno español no autorizó el derribo de las murallas y el plan de ensanche

de la ciudad hasta los años 1854 y 1859. En la segunda fecha, se impone el brillante proyecto del urbanista Ildefons Cerdà. Con el derribo de la Ciudadela, levantada tras la guerra de Sucesión en 1868-1873, se completó el proyecto de eliminación del sistema de fortificación que había constreñido el desarrollo de la ciudad hasta extremos inauditos.

En La Habana, el proyecto sería menos traumático, pero, en sustancia, el mismo. En 1863 se iniciaron las tareas de demolición de la corona de murallas, no así de las fortificaciones anejas, pues estas no interferían del mismo modo en el futuro crecimiento de la ciudad hacia los barrios de Monserrate, San Lázaro y, ya en el siglo pasado, El Vedado. El crecimiento de la metrópoli caribeña fue imparable. La Habana no solo se convirtió en un gran puerto, punto de llegada de militares y emigrantes y un gran centro comercial, sino que, al mismo tiempo, era una importante ciudad manufacturera de tabaco, con muchos talleres en su interior. En 1859, año para el que disponemos de cifras fiables, de los cerca de veinte mil trabajadores de las fábricas de cigarros, 15.128 (el 77,2 %) estaban en la propia ciudad. En 1899 habían descendido a los 12.128, el 50 % del total. Es importante recordar que una parte muy importante de la industria cubana se desplazó, para evadir los altos aranceles estadounidenses hasta el estado de Florida, hasta Tampa y Cayo Hueso, donde seguían trabajando con primera materia cubana. La importante concentración de trabajadores de origen cubano en los talleres establecidos en territorio estadounidense mantuvo fuertes lazos con su mundo de origen, una conexión que explica su peso político a favor de la insurgencia cubana. En la isla, algunos de aquellos talleres alcanzaron pronto el tamaño de pequeñas fábricas urbanas, como ejemplifica la del catalán José Partagás en su ubicación de 1845. El crecimiento de la ciudad refleja todo eso, mucho más si le añadimos la población portuaria de Regla, Guanabacoa y los pequeños municipios adyacentes. Como sucede en el caso de Barcelona, el gran desarrollo urbano no fue producto del crecimiento vegetativo, sino de migraciones internas regionales y de gentes de la península atraídas por su mercado de trabajo y los salarios de la industria. En el caso de La Habana, la ciudad atraía a gentes de su entorno inmediato, así como (y hasta el presente) de la Cuba oriental.

Barcelona y La Habana fueron por muchas razones grandes centros de difusión de ideas y cultura internacional. Barcelona, por su cercanía a la frontera con Francia y el contacto regular con Marsella y otras ciudades portuarias mediterráneas y atlánticas; La Habana, porque fue el mayor punto de contacto con el mundo protestante y angloparlante de todo el orbe hispánico, por razones obvias de la internacionalidad fronteriza del Caribe y por la cercanía de Estados Unidos. En sociedades dominadas por un catolicismo sin fisuras, la presencia de visitantes atraídos por la actividad de ambas ciudades y los contactos que desde ellas se establecieron fueron las causas de que ciertas ideas penetraran en España y en Cuba.

Esta es una cuestión que no puede responderse más que a través de ejemplos. A mediados del siglo XIX, por ejemplo, las ideas frenológicas o pedagógicas de personajes como Marià Cubí o Ramon Pintó, este último ejecutado acusado de colaborar con los anexionistas de Narciso López mediante los expeditivos procedimientos de la justicia militar española en la isla, se forjaron en la península, pero se completaron y adquirieron un sesgo particular en contacto con los grandes centros culturales norteamericanos de la costa este. Lo mismo sucedería en el caso de las ideas políticas de la época. Sin ir más lejos, los ideales societarios socialistas, en sus distintas variantes, llegaron a la península desde Europa, en contactos que se establecieron en Madrid y Barcelona. Fue en esta última donde, por el peso de su concentración obrera singular, el sindicalismo socialista y el anarcosindicalismo arraigaron con mayor fuerza a partir de 1871. Desde Barcelona, estas corrientes se extenderían a La Habana a través de emigrantes y exiliados. El caso de Pere Esteve (1865-1925), documentado por Joan Casanovas, resulta ejemplar. En las dos últimas décadas del siglo XIX, la emigración de trabajadores tabaqueros a Florida, así como el propio exilio político desde la isla, permitiría al mundo laboral cubano recibir igualmente la influencia del pujante sindicalismo norteamericano. Lo mismo sucedería en cuanto a las ideas políticas, como tendremos ocasión de analizar en el próximo apartado.

Crisis de imperio, guerras de separación y respuestas políticas

Si los intercambios culturales encontraron en aquellas ciudades el lugar perfecto para acomodarse, mucho más se manifestó este fenómeno en el terreno de las transferencias políticas que arraigaban en un sistema en plena quiebra. Una crisis que lo era, al mismo tiempo, del sistema de la restauración canovista a ambos lados del Atlántico y del nexo colonial. En la última década del siglo XIX, además, el conflicto se agravó por la proyección cada vez más intensa de la presencia norteamericana en el Caribe y, en términos más específicos, por su proyección sobre las tres posesiones españolas de las Antillas y el Mar de China.

Como ya se mencionó, los propósitos de la España metropolitana de integrar a los coloniales en el marco político liberal en Cuba y Puerto Rico fracasaron en el caso de Cuba. Con el ya citado Pacto de Zanjón de 1878, un sector del ejército mambí —forzado por una serie de derrotas militares y el apresamiento de Tomás Estrada Palma, quien sería más adelante primer presidente de la República elegido por el parlamento insurgente— aceptó las condiciones de rendición ofrecidas por el capitán general y jefe de los ejércitos españoles en la isla, Arsenio Martínez Campos. Por el acuerdo se reconocía la libertad de los esclavos que se habían integrado y habían sido liberados por el ejército mambí y la formación de partidos

políticos y la libertad de prensa, a costa de la aceptación de la soberanía española sobre toda la isla. Por esta última razón, el general mulato Antonio Maceo y otros combatientes de la primera guerra no aceptaron las condiciones impuestas en Zanjón, por lo que prosiguieron unos pocos años después la actividad insurreccional y militar contra el Gobierno colonial. Las dos vías, la insurreccional y la política, esbozadas en los años 1865-1869, discurrieron en paralelo hasta el siglo XX.

En el contexto de las reformas políticas emprendidas, se organizaron los dos grandes partidos políticos que pugnarían en Cuba en las particulares elecciones que se produjeron hasta el principio de la segunda guerra de secesión, en 1895. Tal como estaba sucediendo ya en Puerto Rico, la réplica antillana de los dos partidos del turno monárquico, el conservador debería canalizar en la isla los intereses de los españoles allí establecidos y de la metrópoli y, por el contrario, el liberal cubano, heredero de los fracasados reformistas de los años 1860, los de las élites cubanas. En el cálculo de las autoridades españolas estaba la idea de una movilización del poder colonial de la isla en favor del primero, asegurando el *statu quo* colonial. Esta hipótesis se daba la mano con el auge de la emigración en masa de peninsulares hacia las ciudades y el campo cubano, una supuesta base de maniobra y balón de oxígeno para la política metropolitana. A pesar de ello, un grupo de notables políticos del partido liberal — gentes como Rafael Montoro, Rafael María de Labra, Enrique José Varona y Antonio Govín o los descendientes de catalanes Carlos Saladrigas y Eliseo Giberga, este último hijo del demócrata barcelonés que había sido deportado a la Isla de Pinos entre 1837 y 1839— consiguió dar forma a una interesante síntesis programática de la reivindicación política cubana (esencialmente blanca, pero tomando buena nota del fin de la esclavitud hasta denunciar la lenta transición al trabajo libre y oponerse al sistema de patronato de 1880), los intereses de las clases medias emergentes y la reclamación de un régimen de autonomía para la isla.

Este último punto era de modo muy consciente el resultado de la asimilación al marco colonial español del prestigio de la Federación canadiense de 1867, del lugar del *dominion* en el marco del imperio británico. La autonomía o *self-government* se situó en el centro de la política española (y catalana) gracias a los cubanos. La intervención de Rafael Montoro en las Cortes en 1886, en respuesta al discurso de la Corona y las conferencias de Labra y Giberga en el Ateneo de Madrid en 1893, fueron momentos fundamentales en la difusión de un programa de reforma que era un ataque frontal a la división provincial española. Este era, precisamente, su punto débil. En la España del turno dinástico, el abuso del Ministerio de la Gobernación, junto con los gobernadores civiles y los entramados de poder provincial, eran los que garantizaban mayorías. La conversión de Cuba en una sola provincia, que constituía una

reclamación vital para los autonomistas, hubiese significado el fin del esquema de poder que sostenía todo el sistema, incluso cuando en 1891 se aprobara el sufragio universal masculino. Frente a ello, el partido conservador cubano movilizó a la opinión española en Cuba para defender la intangibilidad del régimen colonial y la integridad de la soberanía. A esta identificación nacionalista, que colocaba a los autonomistas cubanos en una posición imposible, se la denominó en la época *integrismo*, un préstamo de los debates religiosos del siglo XIX. Por esta razón, la metrópoli respondería con dos tentativas de reforma política, la de Antonio Maura de 1891 y la de Abarzuza de 1895, ambas fracasadas cuando los conservadores volvieron al poder. Solo durante la guerra y sin credibilidad alguna, se trataría de recuperar la idea de autonomía para las dos posesiones de las Antillas.

La transferencia del debate político cubano en términos de política española se explica en gran medida por el cambio radical en el comportamiento migratorio español. Las dos últimas décadas del siglo XIX y la primera del siglo XX estuvieron marcadas en el mundo y en el caso que nos ocupa por la tendencia a la emigración en masa. La cronología del fenómeno muestra que no se trataba de algo inducido políticamente, sino de la expulsión masiva de peninsulares como resultado de la crisis agrícola finisecular, así como la ruina del cereal y de la viticultura por el impacto de la epidemia de filoxera de las vides. Como explicó Albert García Balanyà, el incremento absoluto del número de emigrantes se tradujo sobre todo en un éxodo masivo hacia América austral y Brasil, resultado de la atracción de los altos salarios por encima del valor de la protección política. A pesar del atractivo menguante del imperio, la década de 1880 y hasta 1892 y, de nuevo, la primera del siglo XX fueron las de mayores salidas de emigrantes hacia la Gran Antilla, aunque una parte de ellos (canarios y gallegos, en particular) como emigrantes de ida y vuelta, la conocida como *emigración golondrina*. En este contexto, el viejo modelo catalán de emigración en red (el *Mataró pattern* de mediados del siglo XIX, como lo denominó José Moya), centrado en ocupaciones comerciales al mayor y menudeo, perdió peso (sin desaparecer) con la llegada masiva de gallegos y asturianos. En 1859, el porcentaje de catalanes sobre el total de nacidos radicados en La Habana era del 10 %, pero esta cifra se redujo porcentualmente y en cifras absolutas conforme nos acercamos al cambio de siglo.

En el marco de esta transformación de la emigración se produjo la llegada masiva de soldados para el ejército español destacado en la isla, una forma encubierta del mismo fenómeno, como señaló el gran historiador cubano Manuel Moreno Fraginals, que debe tomarse en consideración. En efecto, la guerra de 1895 a 1898 significó un importante episodio de movilización: 170.000 soldados durante la guerra de los Diez Años (1868-1878), a los que deben añadirse los 60.000 voluntarios que, como tropas de complemento, fueron

movilizados en 1871. Durante la segunda guerra, 220.000 soldados fueron mandados a Cuba, en esta ocasión sin el auxilio de voluntarios. Las muertes fueron elevadas, más en los cuarteles por enfermedades que en el mismo campo de batalla. Los cubanos muertos fueron muchos también, con episodios contra civiles de auténtica infamia. En especial, las conocidas como *reconcentraciones* del general Valeriano Weyler, una fórmula pensada para aislar al ejército independentista cubano, concentrando a campesinos y ganaderos para dejar en la hambruna a la retaguardia de los insurrectos, tuvieron un impacto muy negativo en la opinión pública internacional (aunque estos métodos expeditivos serían proseguídos por los norteamericanos, en Filipinas; por los británicos, en la Segunda Guerra *Bóer*, en África del sur; y por el general Von Trotha, en el África Occidental Alemana, en el exterminio de los *herero* y *nama*). Al abandonar España un esfuerzo militar insostenible, muchos soldados fueron repatriados, pero un número importante permaneció en la isla una vez que esta se independizó, formando la avanzadilla de la gran oleada de recién llegados después de que el pabellón español ya no ondeara en la plaza de Armas de La Habana. El regreso de los repatriados con los clásicos vestidos de rayadillo, enfermos y desmoralizados, constituyó un episodio patético y lamentable, que explica alguna de las reacciones posteriores contra el embarque de tropas, como iba a suceder con ocasión de la segunda guerra de Marruecos en 1909. Su depauperación y abandono supuso uno de los más poderosos argumentos del emergente nacionalismo catalán del cambio de siglo. Un símbolo tangible del desprestigio del Estado.

La guerra había resultado inevitable y la derrota frente al ejército cubano y la intervención norteamericana, inapelable. En los años noventa, el agotamiento de las demandas de los liberales cubanos, el fin del proceso de emancipación de los esclavos, los problemas arancelarios con la propia metrópoli, que disponía finalmente de una pequeña pero pujante industria azucarera en la vega de Granada, y con los Estados Unidos, el principal mercado del azúcar cubano y del café puertorriqueño —factor este último de enorme importancia y que motivaría el llamado movimiento económico de las instituciones habaneras y cubanas para la defensa de los intereses de una industria de base agrícola que resistió con éxito la prueba de las dos guerras y el paso a la mano de obra libre— conducirían al colapso al régimen español en la isla. Este no tenía ya mucho que ofrecer. En el Tratado de París de 10 de diciembre de 1898, una España muy debilitada en todos los frentes no pudo siquiera garantizar, en su artículo primero, la soberanía cubana frente a los Estados Unidos, comprometiendo la futura independencia de la isla. El peso de la insurgencia forzó a ambos gobiernos a aceptar su independencia, en franco contraste con lo sucedido en Filipinas, Guam y Puerto Rico.

Imperio, nación, ciudadanía y emigrantes. Barcelona y La Habana en el nuevo siglo

Lo que sucedió con la derrota española por agotamiento en la manigua cubana, el éxito militar cubano y la intervención norteamericana tiene pocos paralelos en el resto del mundo. Expresado con la mayor concisión, la nación perdedora y forzada a una descolonización acelerada y poco honorable volcó sobre la nación vencedora una oleada sin precedentes de emigrantes en busca de trabajo. En la primera década de siglo —la de mayor emigración de europeos hacia el Nuevo Mundo, entre uno y dos millones anuales a partir de 1902— el mayor número de los inmigrantes llegados a la isla continuaron siendo españoles. Estos inmigrantes se sumaron, obviamente, a los 130.000 residentes españoles aproximados que ya residían en la antigua colonia. Jordi Maluquer de Motes calculó que el número de españoles que entraron en la isla fue de cerca de 800.000 (60,8 % del total) entre 1902 y 1931, es decir, de unos 25.000 anuales, con un pico extraordinario de más del doble en 1905. Esta apreciación debe corregirse, indicando que el monto de la emigración neta (porque muchos viajaron más de una vez) debe situarse en torno a los 11.000 anuales. En las circunstancias posteriores a 1898, esto significaba asentarse y trabajar en un contexto de crecimiento económico expansivo tanto en el sector del azúcar como en el del tabaco. Una economía expansiva que precisaba de un sector de servicios, en la que, además, los efectos del Tratado de París y de la ley de inmigración de 1902 (de impronta norteamericana) permitieron a los españoles residentes en la isla conservar patrimonio y nacionalidad, así como transmitirla a sus hijos si estos lo deseaban. En efecto, en función del artículo quinto de la Constitución de 1901, los hijos nacidos en Cuba deberían decidir, al llegar a los 21 años, si tomaban la nacionalidad del país de acogida o mantenían la de sus padres. Esta posibilidad de permanencia poco problemática valió incluso para los 36.028 soldados que, en estimaciones de César Yáñez, no regresaron de Cuba y Puerto Rico al término de la guerra, del total de los 572.772 que fueron mandados a las dos islas, aunque no podemos saber el número de los que salieron en otras direcciones o regresaron con posterioridad.

Esta impresionante dinámica de acogida se mantuvo durante más de dos décadas, hasta que los factores de atracción cayeron en picado en 1917-1920, con la disminución de la navegación transoceánica como consecuencia de la guerra y el fin de la prosperidad azucarera a la que más adelante nos referiremos. Esto sucede, además, cuando el peso porcentual de inmigrantes españoles estaba siendo fuertemente contrapesado por la inmigración de braceros haitianos y jamaicanos para el sector azucarero cubano. Con todo, el número de ciudadanos españoles en Cuba (inmigrantes más su descendencia) ascendió por encima del número de inmigrantes registrados, aumentando en los censos oficiales de 129.240 (8,2 % del

total), en 1899, y 228.138 (11,1 %), en 1907, a 404.074 (14 %) y 625.449 (15,8 %), en 1919 y 1931. En la ciudad de La Habana, uno de cada cuatro habitantes era español (el 24,5 %, en el censo de 1907), el lugar donde el número de españoles era mayor en cifras absolutas y porcentuales. La proporción de los habaneros blancos era todavía mucho mayor. La procedencia peninsular de este importante grupo humano es, también, muy significativa. La mayoría procedían de las regiones norteñas españolas (Galicia y Asturias, más Castilla y León), con el añadido de la emigración golondrina tradicional de los canarios. Sin embargo, la inmensa mayoría se estableció en el comercio al por mayor y minorista, un sector en expansión que puede corresponderse perfectamente con el crecimiento de las agriculturas del azúcar y tabaco. Las dificultades que estos contingentes pudiesen hallar se agravaron más adelante en el momento más dramático de la depresión, hacia 1931-1933, cuando sus potentes organizaciones y las limitaciones del mercado de trabajo levantaron tensiones y algunas respuestas institucionales restrictivas, como la ley del 50 % de Grau San Martín, que perseguía “nacionalizar” los puestos de trabajo en la isla.

Los emigrantes españoles llegaban a Cuba bajo condiciones fijadas por unas leyes de inmigración forjadas con el restrictivo patrón estadounidense del gobernador Leonard Wood, que impedía inicialmente la entrada de caribeños de origen africano y de chinos, es decir, de los dos grandes grupos que definieron la inmigración esclava y contratada hasta 1880. En efecto, el despliegue de la nueva República cubana no se realizó en condiciones de la nación independiente por la que se había luchado, sino bajo una férrea tutela norteamericana. De forma paradójica, esto facilitaba la entrada de inmigrantes españoles, los únicos que, con las exclusiones citadas, ya estaban establecidos en la isla y disponían de una red “étnica” de acogida. El elemento más visible de la independencia relativa de la joven República era la presencia de la enmienda Platt en la constitución cubana de 1901, constitución que estuvo vigente hasta 1940; no obstante, también debe reseguirse en los principios de reciprocidad que regularon las relaciones comerciales entre los dos países. La enmienda pasó a la posteridad como la llave que permitía la intervención norteamericana en la isla, como efectivamente sucedió en diversas ocasiones en la etapa de consolidación de la República. No se limitaba a esto, sino que coartaba la soberanía cubana en varios aspectos (gasto militar, soberanía territorial, relaciones internacionales), por lo que fue considerada como una afrenta a la integridad nacional y denunciada duramente por algunos de los dirigentes del Partido Revolucionario Cubano que había vencido a los españoles, como Juan Gualberto Gómez, Salvador Cisneros Betancourt y Manuel Sanguily. A pesar de ello, la enmienda Platt pesaría gravemente sobre el futuro político de la joven república independiente hasta el año 1933, en que el movimiento revolucionario contra Gerardo Machado y el interregno de Carlos Manuel

de Céspedes culminó en un vuelco político nacionalista y reformista. La política de buena vecindad de Franklin D. Roosevelt y el cambio político cubano de los años treinta, de fuerte contenido antiimperialista, permitieron encajar dos grandes reivindicaciones cubanas: la abolición de aquella injerencia en la constitución del país y la forma de un nuevo tratado de reciprocidad económica en sustitución del de 1903.

Estas dificultades cubanas en el marco de la primera expansión imperial estadounidense fuera de sus fronteras constituyen un interesante paralelismo con lo que estaba sucediendo en la España pos-1898. Como han mostrado los historiadores económicos, la pérdida de Cuba —en realidad, el hundimiento del que fue conocido como *pequeño imperio*, el de las tres colonias— no significó un retroceso económico de gran relevancia. Ciertamente, los gobiernos españoles se vieron obligados a un importante reajuste presupuestario derivado de los costes de la guerra, que el ministro del ramo, Fernández Villaverde, resolvió con solvencia. La economía española en su conjunto se reorientó más y más hacia Europa (aún con un grado de apertura exterior limitado), tendencia que culminó en los años inciertos de la Gran Guerra europea, cuando muchos sectores españoles, incluyendo la industria textil, metalúrgica y química catalanas, conocieron un gran momento de prosperidad. Igualmente, algunos historiadores de la política y la cultura resaltaron que el país soportó con notable calma la pérdida de las últimas posesiones ultramarinas. Calma y alivio, como es razonable pensar, por el fin de la sangría humana que representó aquel fallido esfuerzo militar.

En estas circunstancias, podemos preguntarnos: ¿qué significó la derrota española de 1898 y la humillación sufrida por el país frente a la gran potencia emergente en el escenario internacional? La respuesta es compleja, pero, si algo parece poco discutible, es que aquellos hechos significaron un incremento de las tensiones internas peninsulares: activaron como respuesta tres potentes nacionalismos —el general español y el vasco y el catalán— y un difuso regionalismo que pugnarían a lo largo del siglo XX para redefinir el viejo pacto que había permitido construir el Estado liberal. Resultaría tan engañoso identificar a los nacionalismos en ascenso con sus sociedades respectivas —muchas franjas sociales no participaban de este— como ignorar la enorme carga de tensión política, cultural y psicológica que esto iba a significar en el futuro. En los años de posguerra se fundó en Barcelona la Lliga Regionalista a partir de entidades más bien testimoniales. Supuso la primera gran formación nacionalista netamente política de la historia catalana, la primera con capacidad de movilización de masas y de competir electoralmente con los partidos ya establecidos: los dos del turno dinástico y los republicanos, divididos en distintas formaciones, carentes por lo general de una estructura organizada. Entre 1901 y 1914, los nacionalistas catalanes no dejarían de mejorar sus posiciones: primero, venciendo en las primeras elecciones generales tras 1898, las del año

1901, en la ciudad de Barcelona; luego, accediendo con victorias electorales al gobierno del municipio de la ciudad (1904); poco después, en 1906, a través de una gran movilización política con la llamada Solidaridad Catalana (una respuesta a la agresión de los militares motivada por unas viñetas sarcásticas en la prensa regionalista); y, más tarde, con el dominio de las cuatro diputaciones provinciales. Este último salto les permitió forjar finalmente, tras arduas negociaciones con los gobiernos de la monarquía, una estructura supraprovincial —la Mancomunidad de Cataluña— con escasos poderes y presupuesto raquítico, pero que, por vez primera, actuaba con alcance catalán y conforme a una idea que, además, calzaba como un guante con las aspiraciones al autogobierno que predicaban los nacionalistas moderados. Ironías de la historia, el ideal de los liberales autonomistas cubanos —unidad de la isla y autogobierno— se realizaba en el espacio catalán unas décadas después.

Fueron los nacionalistas de la Lliga Regionalista los que emprenderían la iniciativa de proseguir la relación con América. En 1911 fundaron la Casa de América y pusieron en su dirección al político, historiador del comercio catalán con América y economista Frederic Rahola i Trèmols. El objetivo de la institución era promover los intercambios con América, con un acento especial en las relaciones comerciales, así como una importante actividad cultural. La institución no solo se dedicó a estas cuestiones que preocupaban a los medios económicos catalanes, sino que desarrolló una importante actividad cultural complementaria, formando una amplia red de centros adheridos, una notable biblioteca y una colección de revistas americanas y de las comunidades españolas en América. El motor intelectual de la entidad fue el político catalán Francesc Cambó, miembro prominente de la dirección política de la Lliga Regionalista, con el fugaz apoyo e inspiración de Frederick Stark Pearson, el capaz ingeniero y empresario estadounidense, muerto en el hundimiento del *Lusitania* por los submarinos alemanes en 1915. No por casualidad, Cambó fue el responsable de la firma del Tratado de Relaciones Comerciales entre España y Cuba en 1922. El mismo político catalán actuó como mecenas para la preparación y prologó el libro *Los catalanes en América. Cuba*, de Carlos Martí, funcionario estatal cubano pero de origen catalán, una apología edulcorada de la actuación de los catalanes en la isla durante el siglo XIX.

El desarrollo del autonomismo nacionalista en Cataluña no fue un camino de rosas. A los problemas de rigidez del marco político español, siempre muy reacio a abandonar la unidad y centralización legislativa y el sistema provincial que le servía de base, se unían las profundas desigualdades del desarrollo económico y social entre regiones. Como el historiador económico Jordi Nadal escribió hace ya muchos años, “el campo siempre como telón de fondo de la industria textil”, esto es, de sus posibilidades limitadas por un mercado interno de desarrollo insuficiente. El paliativo que representó la ley de relaciones comerciales de 1886 no

podía encontrar otro recambio que el desarrollo interno del país. Incluso con estas restricciones, Barcelona prosiguió el camino hacia lo que sería una gran ciudad y capital industrial.

Conflicto y división en la República cubana y en el espacio político catalán

La amenaza que significaba la enmienda Platt para la República cubana debe relacionarse con sus divisiones internas, tanto las sociales como las derivadas de la fuerte competencia política en las dos primeras décadas del siglo. Al igual que sucedió en Cataluña y en España después de 1898, la República cubana nació marcada por una fuerte inestabilidad institucional y con problemas sociales, herencia de su pasado esclavista y de divisiones sociales y de “raza” muy profundas. La cuestión más acuciante era cómo acomodar las demandas de una población dividida por su posición social, origen y, a pesar de la ideología oficial de la República, por el color de su piel. En este contexto, el problema de mayor urgencia era el de los derechos de la población antes esclava o sus descendientes, la “población de color”, además de la población china y sus descendientes, también llegada a la isla en condiciones muy cercanas a la esclavitud. Los descendientes de esclavos, negros y mulatos habían formado una parte muy activa del Ejército Cubano de Liberación. Para ellos, el lema martiano “ser cubano es más que ser blanco o negro” tenía un significado fundamental e irrenunciable de mejora social y afirmación de igualdad de derechos. El tenaz esfuerzo de los descendientes de esclavos para acceder a la tierra y el trabajo están documentados por historiadoras como la ya citada Rebecca J. Scott de modo concluyente. En este punto, los derechos de este grupo, la reconversión de las unidades productivas con capital británico, norteamericano y cubano, en la perspectiva de ocupar solo a asalariados con bajos sueldos o colonos muy subordinados al central azucarero, chocaban en gran medida con las aspiraciones de muchos afrocubanos a la propiedad campesina.

Otro factor indiscutible de tensión remite al limitado acceso de los excombatientes del Ejército Cubano de Liberación a puestos oficiales. Este problema envenenó la vida republicana hasta extremos notables, lo que ponía de relieve la contradicción de la afirmación republicana de una ciudadanía universal, sin consideración a las divisiones heredadas de una sociedad basada en el trabajo esclavo y la presencia indudable de relevantes personalidades afrocubanas en las más altas esferas del Estado, incluyendo a senadores y congresistas. Entre ellos estaba Martín Morúa Delgado, presidente del Senado, que denunció la postergación de los afrocubanos en la vida republicana, situando el problema sobre la mesa. Este motivo, captado muy rápidamente por el grupo de antiguos oficiales republicanos, condujo a la

formación, en 1902, del Comité de Veteranos de Color y, en 1908, a la del Partido Independiente de Color por parte de Evaristo Estenoz, un “mulato” nacido en esclavitud. Mientras, la mayoría de afrocubanos seguían vinculados a los liberales cubanos de José Miguel Gómez, cuyo periódico destacaba por un indiscutible tono de distanciamiento del pasado y la herencia española. Este era el caso de Morúa, radicalmente contrario a la afirmación racial de Estenoz. En mayo de 1912, se produjo el alzamiento armado de los antiguos oficiales “negros” —la conocida como “guerrita de las razas”—. El levantamiento encontró la oposición completa de los congresistas negros y del propio Juan Gualberto Gómez. Este suceso motivó una nueva intervención intimidatoria norteamericana en aplicación de la enmienda Platt y terminó en una masacre de los sublevados, con muertos y ejecutados, incluyendo al fundador del movimiento, aunque las cifras que circularon en la época son inciertas y nunca se han comprobado. En los mundos forjados por la esclavitud y la plantación, en definitiva, no existen sociedades libres de problemas raciales, que lo son, al mismo tiempo, de acceso a la tierra, la educación y la igualdad política. Sin embargo, como señala el historiador cubano Alejandro de la Fuente, “el propio origen de la república es un ejemplo magnífico de esas ambigüedades”. El sufragio universal masculino, que se aseguró en 1901 (tanto España como la propia república cubana insurreccional lo habían impuesto ya antes de 1899, aunque el voto femenino no se reconoció tanto en España como en Cuba hasta 1933), a pesar de las presiones estadounidenses, que no aceptaban el voto de la población de origen africano, se había originado en una idea nacional fundamentada en una larga etapa de lucha interracial. De estos claroscuros debemos partir para poner cada cosa en su lugar, para comprender que la dramática elección y final de Estenoz y sus seguidores no ocluyó otras formas de participación política y de acceso a la educación. Hacia 1920 se hizo casi del todo imposible seguir distinguiendo a una “clase de color” propiamente dicha, un grupo humano que todavía había sido censado en estos términos en el primer censo oficial de la República, el de 1907.

No era esta la única línea divisoria imperante en la sociedad cubana. La otra era la que derivaba del peso espectacular de la emigración española en su conjunto durante las dos primeras décadas. El caso cubano y habanero es, en este sentido, muy particular, porque a las divisiones entre los propios cubanos se añadía el factor de que los inmigrantes fuesen, hasta la legalización posterior de la entrada de braceros caribeños, tan conspicuamente de un único grupo y este proviniese, para más significación, de la metrópoli derrotada. La adaptación de la comunidad española a las nuevas condiciones no pudo ser más exitosa. Esta se basaba en una doble estructura de sociedades regionales y corporativas (la Asociación de Dependientes fundada en 1880), así como de la misma estrategia laboral de la miríada de pequeñas empresas en el sector terciario. La primera de aquellas sociedades había sido, precisamente, la

Beneficencia de los Naturales de Cataluña, fundada en 1840. En la segunda mitad de los años setenta y ochenta del siglo XIX, se fundaron la gallega y asturiana, las cuales, con la emigración en masa del cambio y principios del siglo XIX, se convertirían en entidades muy poderosas. Un poco más tarde se fundó la Asociación Canaria, y luego la siguieron algunas más hasta cubrir todo el espectro de la emigración regional española. Contaban, por lo general, con hospitales y atención médica, escuelas y economatos para sus socios y, por supuesto, espacios de ocio y vida asociativa, lugares y prestaciones que continuaron con buena salud a pesar del declive de la llegada de emigrantes desde los años treinta. Más adelante, a finales de los años veinte, la grave crisis económica cubana inducida por la caída de los precios del azúcar aceleró tendencias al nacionalismo y al populismo en la isla. Algunos partidos, como el caso del llamado ABC, del que nos volveremos a ocupar, expresaron posiciones de nacionalismo xenófobo en su programa, esto es, la exigencia de medidas para cubanizar el trabajo, una reivindicación dirigida principalmente contra los trabajadores inmigrantes españoles y los braceros antillanos. Algunas de estas reclamaciones influyeron en los cambios de las leyes de inmigración del gobierno de Grau San Martín y de cuota del 50 % en los empleos, el 19 de abril de 1933. En el mundo social cubano, estas reticencias al peso de los intereses extranjeros se proyectaron en ocasiones contra los negocios de españoles, de tanto peso en la isla y en La Habana en particular. Estas tendencias se habían manifestado ya en los años 1919-1920, incluso promoviendo iniciativas legislativas.

Barcelona, que había sido conocida por el anarquismo internacional como *la ciudad de las bombas*, revivió su prestigio revolucionario con episodios de significado muy diverso — terrorismo anarquista en los años 1893 y 1896 (el asesinato de Cánovas en plena guerra en Cuba y Filipinas fue la venganza del anarquista italiano Angiolillo, quizás con apoyo cubano, contra las penas de muerte que resultaron del juicio a los que habían perpetrado el segundo de los atentados), huelga general de 1902, quema de conventos durante la Semana Trágica de 1909—, pero que remitían a la enorme violencia latente condensada en una ciudad fabril que era, al mismo tiempo, capital de una región igualmente industrial. Frente a ello, el nacionalismo catalán de los primeros quince años del siglo pasado disponía de un ambicioso programa de unidad cultural catalana para su propia sociedad y de un igualmente ambicioso proyecto de influir decisivamente en el Estado y en la vida política española.

Todo ello se resolvió, no obstante, en algo mucho más modesto: un potente regionalismo institucional larvado por dramáticas circunstancias internas, por la violencia de clases y por las circunstancias generales de la política española. Un programa que tuvo que conformarse en coexistir con el ascenso en paralelo de republicanos y sindicalistas. En este contexto de fuerte competencia política, cada progreso del nacionalismo resultó puntuado por

fuertes tensiones sociales —las propias de una sociedad densamente industrializada— que hipotecaron el despliegue de su programa: huelga general de 1902; la revuelta de la Semana Trágica contra el embarque de tropas —de nuevo— hacia Marruecos, en una guerra sin fin; la oleada de huelgas, cierres patronales y atentados que ensangrentó Barcelona cuando se percibía el fin de la prosperidad ligada a la coyuntura de guerra en Europa. En esta última etapa, el conflicto social se desarrolló hasta cierto punto como una guerra abierta entre las organizaciones patronales y sus fuerzas de choque (los somatenes, el conocido como Sindicato Profesional Libre) y el anarcosindicalismo —el gran sindicato libertario había sido fundado en 1910, sobre la base también de organizaciones obreras con más de medio siglo de existencia en ocasiones— y los grupos de choque de orientación decididamente anarquista. El golpe militar del general Miguel Primo de Rivera, en 1923, auspiciado por la élite catalana por claras razones de orden público y para poner fin a la desafiante presencia de las organizaciones obreras, disolvió en la nada los esfuerzos de los nacionalistas para encontrar una salida política (la campaña de los años 1918-1919 a favor de un estatuto de autonomía) al pleito catalán. Este fue un momento, además, en el que toda Europa discutía sobre el derecho a la autodeterminación por inducción del presidente estadounidense Woodrow Wilson, en el enrarecido ambiente forjado por el Tratado de Versalles, que cerró la Gran Guerra.

Cultura y política en la prosperidad y en la crisis

Durante los años veinte, los dos países y las dos ciudades vivieron momentos muy contradictorios. Fueron los años de la dictadura de Primo de Rivera en España, entre 1923 y 1931. Una etapa marcada por un fuerte autoritarismo, por la guerra en Marruecos y por el conflicto entre el régimen monárquico y las grandes fuerzas sociales que habían emergido con el cambio de siglo: un poderoso movimiento republicano de las clases medias, la potencia de las organizaciones obreras anarcosindicalistas y socialistas en distintas partes del país, incluyendo un emergente sindicalismo agrario en la España vitícola y en el sur latifundista; y, finalmente, el poderoso movimiento nacionalista vasco y catalán con sus epicentros en Bilbao y Barcelona. Frente a estos retos, la dictadura militar no tenía más alternativa que la represión, cerrar filas y recurrir a los viejos y desprestigiados procedimientos caciquiles heredados de los partidos dinásticos. Como mostró el gran conocedor de este periodo Enric Ucelay-Da Cal, la dictadura se originó sobre un fondo de violencia social abierta, sobre todo en las calles de Barcelona, tras el fin de los grandes beneficios empresariales propiciados por la guerra en Europa. Además, si los años veinte estuvieron marcados al principio por una cierta prosperidad

del mundo empresarial, los síntomas de desaceleración fueron evidentes en la segunda mitad de los veinte, para hacerse esta coyuntura más grave a principios de la década siguiente.

En este contexto, la Mancomunidad de 1914 sería abolida entre 1924 y marzo de 1925, fecha esta última de la aprobación del conocido como *Estatuto Provincial*. La Lliga Regionalista quedó fuera de juego pese a haber jugado la carta de una solución militar de orden. Influyentes, a pesar de todo, en el complejo monárquico en el que Francesc Cambó —el hombre de los nacionalistas en la política española— había ocupado posiciones ministeriales de alto nivel en los gobiernos conservadores de Maura de 1918 y 1921 (cuando gestó precisamente el nuevo régimen de relaciones comerciales con Cuba), trataron de controlar la política económica de los gobiernos de la dictadura y guiar su proceso final hacia una nueva solución monárquica de compromiso con las viejas fuerzas políticas del turno dinástico.

Para otras opciones políticas, la clandestinidad inevitable abrió la puerta a soluciones más drásticas. Para el gran sindicato anarquista, la CNT, la disyuntiva estaba entre el fracaso de sus llamadas a la acción colectiva, que no prosperaron, y la acción de pequeños grupos armados de vocación insurreccional. De modo muy llamativo, esta sería la respuesta igualmente de un grupo minoritario dentro del movimiento nacionalista que eran los separatistas de Estat Català y otros grupos afines, partidarios de la insurrección armada. Del magma proteico de estos grupúsculos emergería la figura singular de Francesc Macià, antiguo oficial del cuerpo de ingenieros del Ejército español y diputado de la Lliga Regionalista, casado con la rica heredera de una importante propiedad agrícola en el interior catalán. En el año 1926, el dirigente separatista buscó el apoyo de los anarquistas y hasta de la Tercera Internacional comunista para fraguar un golpe militar contra la Dictadura. Fracasado el golpe de Prats de Molló por obra de delatores italianos infiltrados, el viejo líder conseguiría convertir el juicio al que lo sometió la justicia francesa —puesto que las operaciones se desarrollaron en suelo galo— en un efecto propagandístico de primer orden.

Imposibilitado en su acción política, el dirigente separatista decidió aceptar la oferta de las sociedades catalanas en Cuba y Argentina para, desde allí, solicitar ayuda financiera y política. En La Habana, Santiago y muchas ciudades de la isla, Macià encontraría el apoyo decidido de los núcleos separatistas que actuaban en el marco de las asociaciones regionales catalanas. Encontraría, además, a un colaborador dilecto en la figura de Josep Conangla i Fontanilles, nacido en Cataluña pero emigrado con treinta años a Cuba en 1905, ferviente partidario de la independencia de Cataluña y militante al mismo tiempo del partido cubano ABC. Esta conexión catalano-cubana conduciría a la redacción de una Constitución republicana y separatista para Cataluña (octubre de 1928), en la que la pluma del citado Conangla fue fundamental, un ejercicio de arbitrio político de escaso recorrido. Se procedió, además, a la

adopción de la bandera separatista con la estrella solitaria de inspiración santiaguera heredada de la república cubana, la de Narciso López, tomada de la **Lone Star** tejana y esclavista. Finalmente, la derrota española de 1898, limpiada de la ambigüedad que significó la intervención estadounidense y la posterior enmienda Platt, se constituyó en la referencia fundamental para un movimiento con más entusiasmo que base social.

No es arbitrario argumentar la existencia de un fuerte paralelismo en la inestabilidad catalano-española y la cubana. Expresión ineludible de esta inestabilidad se encuentra en la ascensión imparable del general Gerardo Machado Morales, hijo de canarios, veterano de la guerra contra España y miembro del Partido Liberal, colaborador de Monteagudo en la represión del Partido Independiente de Color. Machado accedió al poder en 1925 a través de elecciones, pero gobernó después con mano de hierro. Trató de acomodar su régimen a las exigencias de la relación económica con los Estados Unidos, al tiempo que emprendía una política de obras públicas importante bajo el lema “agua, caminos y escuelas”, con un cumplimiento importante de este (un ejemplo emblemático: la construcción de la carretera central). Sin haber propiciado un golpe de Estado comparable al paralelo en España, marginó casi por completo a la cámara legislativa, tratando incluso de vulnerar los mandatos presidenciales establecidos por la constitución.

Al igual que sucedió durante la dictadura española en Madrid y en Barcelona, la oposición a Machado tuvo un doble componente político e intelectual, con continuas interacciones entre los dos ámbitos. De nuevo, como en la vieja metrópolis, los ocho años de gobierno dictatorial tuvieron como consecuencia más directa la descomposición del sistema de partidos que emergió con la independencia. Liberales y conservadores habían mostrado la dificultad para integrar a franjas notables de la vida cubana, en particular, a los núcleos de intelectuales y profesionales que se consolidaron en los años veinte. Entre todos estos grupos, el autodenominado *grupo minorista* —expresión irónica de Jorge Mañach, uno de sus miembros más influyentes junto con Emilio Roig de Leuchsenring (abogado e historiador de La Habana)—, en el que figuran Juan Marinello, Alejo Carpentier, Rubén Martínez Villegas, Fernando Ortiz, Alberto Lamar Schweyer, Martín Casanovas y otros tantos, tiene un marcado carácter de refundación republicana y antiimperialista. Con planteamientos de intervención en la economía que denominaron *determinismo económico*, algunos minoristas defendían un nacionalismo con marcados tintes discriminatorios hacia los cubanos con antepasados africanos. En su programa se proponía excluir del voto a los que no supiesen leer y escribir —uno de los modelos censales de los estados segregacionistas del sur de los Estados Unidos—, a los que acusaban de ganar posiciones en el régimen de Machado y contra la presencia importante de braceros haitianos y jamaicanos. Destaca, igualmente, en su obra la

preocupación por la integración cultural de una república que entienden lastrada por la penetración extranjera en la economía y los servicios. Por esta razón, en su manifiesto programa del año 1931 abogaron por la “intervención preferente del cubano en las actividades comerciales e industriales”. Esta preocupación nacionalista recorre la obra de dos de sus personajes más emblemáticos, Fernando Ortiz y Alberto Lamar, pero con resultados distintos, si no opuestos. Como distinta de Ortiz era la posición ideológica de Jorge Mañach (“fóbica” más que ideológica alguien señaló) con relación a la participación de los afrocubanos en la vida política. Fernando Ortiz marcó, junto con Ramiro Guerra (cuyo *Azúcar y población en las Antillas*, de 1927, provocó una interesante respuesta del español Luis Araquistáin, *La agonía antillana. El imperialismo yanqui en el Mar Caribe*), las grandes líneas de la cultura cubana de la primera mitad del siglo XX. Fernando Ortiz fue el gran estudioso de la cultura afrocubana, en una evolución notable desde su punto de partida, muy influido por las teorías de la “antropología criminal” del italiano Cesare Lombroso, hasta la perspectiva mucho más matizada, de fundamento etnológico e histórico, que recorre las páginas de *Contrapunteo cubano del tabaco y el azúcar*, de 1940. En palabras del historiador de la cultura Arcadio Díaz-Quiñones, “en el curso de sus investigaciones posteriores habría descubierto la transculturación que le permitió construir un metarrelato de la cultura nacional basado en la larga reflexión sobre la hibridación y la mezcla”.

Los miembros del grupo minorista oscilaron entre la militancia en el clandestino grupo ABC y el Partido Comunista, entre la integración racial martiana y un nacionalismo blanco, entre la izquierda y la derecha, muy receptivos todos ellos a los aires populistas, antiimperialistas y, en algunos casos, con una fuerte propensión al uso de la violencia política en el contexto de la dictadura machadiana. La movilización social, de obreros y estudiantes, junto con la propaganda y la acción de ABC fueron decisivas en el cambio político de 1933, finalmente fracasado. En ABC militaba también el ya citado Conangla i Fontanilles, promotor del viaje de Macià e inspirador máximo de la constitución republicana catalana de 1928. Con todo, el grupo minorista fue un grupo destacadamente intelectual, volcado en la reforma de la República, sus partidos y su constitución. Algunos de ellos —Ortiz, Marinello, Casanovas y quizás Mañach— eran de familias y procedencia catalanas o catalano-cubanas: Ortiz, crecido en Menorca y doctorado en leyes en Barcelona y Madrid; Marinello, educado en Vilafranca del Penedès hasta los dieciséis años. Sin pretender paralelismos fáciles, el grado de influencia de estas vinculaciones no ha sido tomado en consideración como merecería.

La revolución del pueblo: 1931, Macià; 1933, Grau San Martín y Guiteras

La etapa dictatorial de Primo de Rivera y Machado llegó a su fin en los primeros años de la década de los treinta. En el caso español, el agotamiento de la Dictadura desembocó en los débiles gobiernos de transición. El primero de ellos fue el del general Dámaso Berenguer Fusté (nacido en Cuba en 1873, hijo de militar alicantino y de cubana de familia catalana; combatiente contra el ejército separatista en la guerra de 1895 a 1898 y, más tarde, en la inacabable guerra de Marruecos), los meses de enero de 1930 hasta febrero de 1931; el segundo fue el de concentración monárquica de 1931, con presencia de un ministro de la Lliga Regionalista. Este segundo gobierno de la conocida como *dictablanda* fue el responsable de la convocatoria de elecciones municipales cuyo resultado condujo a la abdicación y exilio de Alfonso XIII y la proclamación de la Segunda República española. Lo sucedido en Madrid y Barcelona mostraba claramente el agotamiento de las antiguas fuerzas monárquicas, que había llegado la hora de los opositores a la dictadura y de las cohortes de intelectuales y profesionales que los acompañaron en aquella tarea. Había llegado el momento también para todas aquellas fuerzas que habían permanecido en las afueras del sistema. En las elecciones municipales, los republicanos (finalmente agrupados en un partido que incluyó a los nacionalistas radicales separatistas) alcanzaron unos excelentes resultados, subrayados todavía más porque ellos fueron los que canalizaron el grueso del voto de la masa afiliada al gran sindicato de inspiración libertaria. En esta constelación de circunstancias, el anciano dirigente separatista Francesc Macià asumió la plena representación republicana en Barcelona y acató el mandato unitario español que le ofrecieron los enviados por el Gobierno provisional constituido en Madrid. La salida política consistiría en facilitar una institución de gobierno para Cataluña, a la que se le dio el nombre de Generalitat —recuperando el nombre de la institución catalana de gobierno constituida en el siglo XIV y vigente hasta la llegada de los Borbones a principios del siglo XVIII—, más la promesa de un estatuto de autonomía para el país, es decir, la propuesta de los nacionalistas de la Lliga de los años anteriores al golpe militar de 1923. En definitiva, la Segunda República española asumió en Cataluña los contornos de autogobierno y autonomía competencial que los autonomistas cubanos habían situado en el escenario político catalán medio siglo antes. Más todavía, el programa republicano y autonomista barcelonés fue inesperadamente encabezado por el dirigente separatista que en La Habana había aprobado una constitución de independencia cinco años antes. Sin embargo, no es sorprendente. El grueso de la política catalana había transitado por esta senda desde principios de siglo, al calor de la crisis del imperio tardío y de sus consecuencias múltiples.

En La Habana y Cuba, la etapa del General Machado terminó en un bucle de tensión notable, un uso sistemático de la violencia política que recordaba la situación barcelonesa anterior al golpe de Primo de Rivera. Esta situación no se resolvería hasta el llamado *gobierno*

de los cien días y la presidencia de Grau San Martín (del Partido Revolucionario Auténtico), con Antonio Guiteras Holmes en la secretaría de estado. A ellos deben añadirse dos personajes más, ambos decisivos: Fulgencio Batista, como jefe del ejército y del movimiento de los “sargentos”, y una figura de primer rango como era Sumner Welles (descendiente del gran *radical republican* Charles Sumner, de Massachusetts; secretario de estado en 1937 y hasta los primeros años de la Segunda Guerra Mundial), el hombre clave de Roosevelt para apartar a Machado, primero, y para urdir una solución acorde con los intereses estadounidenses, después. El momento de las relaciones con los Estados Unidos fue particularmente crítico y tenso, en la medida en que el gobierno cubano estaba decidido a reformar la constitución y eliminar la enmienda Platt. El proceso de negociación en Washington se dilataría hasta dos años más tarde, en el contexto de la política de “buena vecindad”, culminando en la eliminación de la injerencia constitucional de 1903.

Los hilos que entretajan las historias de Cuba-España y España-Cuba, tal y como el historiador cubano con ascendencia catalana Manuel Moreno Fragonals acuñó, son muchos y muy complejos, pero cada uno es cada uno y las analogías en historia sirven de poco. El motor intelectual y político del gobierno de los cien días fue Antonio Guiteras Holmes, nacido en Filadelfia en 1906, de padre catalán y madre irlandesa. Es esta una historia ejemplar de las relaciones cruzadas entre Cuba y Cataluña, que merece ser contada. Los Guiteras y los Gener eran originarios de Arenys de Mar y Calella, respectivamente. El tío paterno de Guiteras Holmes, José Ramón Guiteras, murió luchando en las filas de los independentistas cubanos. Ya antes, la familia había desafiado con reiteración al régimen colonial español. En efecto, las familias Guiteras y Gener de Matanzas y Cárdenas, que Karo Miranda investiga en la actualidad, estaban emparentadas y compartieron muchas calamidades derivadas de su posición política en la isla. Pedro José Guiteras, nacido en Matanzas, tuvo serios problemas con las autoridades españolas ya desde los tiempos de Tacón, que no le dejó entrar en la isla en 1837. En 1843, Pedro José fue detenido por haber publicado un folleto a favor de la extinción de la trata de esclavos, siendo encarcelado durante seis meses al año siguiente cuando aconteció la conspiración de la Escalera; en los años cincuenta, publicó diversas obras de relevancia sobre Cuba, tanto de historia y política como de literatura. Entre ellas destaca una importante historia de Cuba en dos volúmenes, de 1865 y 1866, que no pudo leerse completa hasta que Fernando Ortiz la editó, así como el *Informe sobre las reformas políticas, sociales y económicas que deben establecerse en Cuba* publicado en Francia, por razones obvias, en 1879, cuando, después de la guerra de los Diez Años, los Guiteras y los Gener formaron parte del ejército independentista cubano. Fue en aquel contexto en el que la segunda de estas familias estableció una fuerte relación con Tomás Estrada Palma, quien sería el primer

presidente de la República cubana. Cuando, después de la guerra, Estrada Palma fue encarcelado en el castillo de San Fernando en Figueres, dos de los hermanos Gener, que habían regresado a Cataluña para evitar la represión en Cuba, lo ayudarían. La generación posterior, los padres de Antonio Guiteras Holmes y su hermana y gran pedagoga Calixta llegarían a Cuba en 1913. Antonio participó en los años veinte en las luchas estudiantiles contra Machado, en posiciones muy radicales influidas por Julio Antonio Mella, joven revolucionario y antiimperialista que se exiliaría en México para caer en el sangriento episodio de represión estalinista contra los acusados de trotskistas. El programa del gobierno de Grau San Martín se atribuye a la fuerza política e intelectual de Guiteras. Muy en los aires de la época, aquel gobierno nacionalista y radical trató de ensamblar el antiimperialismo (liquidación de la enmienda Platt) y la regeneración republicana con la convocatoria de una asamblea constituyente, intervención del Estado y medidas sociales profundas. Este último aspecto —jornada de ocho horas, salario mínimo, proyecto de reforma agraria— fue el resultado de la resolución y el peso intelectual de Antonio Guiteras. Antonio Guiteras cayó en combate desigual contra las tropas de Batista en 1935.

Cuando estalló la guerra civil española en el verano de 1936, mil doscientos cubanos se enrolaron en las Brigadas Internacionales, una cifra impresionante en términos absolutos y relativos. Uno de ellos, el aviador camagüeyano Alberto Bayo Giroud, hijo de español y cubana, participó en la única operación a gran escala emprendida desde Cataluña: el desembarco en la Mallorca en manos de los “nacionales”, que estaban usando la isla como base para los bombardeos sobre Barcelona y el litoral mediterráneo. Exiliado en México, Bayo Giroud sería el responsable más tarde del entrenamiento militar de los jóvenes cubanos que se proponían derribar a Fulgencio Batista. Murió en La Habana con el grado de general del ejército cubano, pero con las insignias del ejército español republicano.